



Hon. José A Fusté, Chief Judge

EL GRAN JURADO

En varias ocasiones he escuchado la discusión pública que se origina sobre el Gran Jurado Federal y me asombro ante la desinformación que hay sobre esta institución. La realidad es que el Gran Jurado, tal y como está establecido por ley, no es ni una sombra de la imagen inquisitorial y de tramoya oculta que algunos pretenden crear en nuestra comunidad.

El Gran Jurado tiene una larga y honorable tradición que se remonta al 1215 y a la Magna Carta inglesa. Eventualmente, al Gran Jurado se le reconoció la potestad de acusar ciudadanos por la comisión de delito grave con entera independencia del poder ejecutivo y el poder judicial. La tradición de gran jurado estaba tan arraigada en las trece colonias que la Constitución Federal le reconoce rango constitucional en la Carta de Derechos. La Quinta Enmienda provee que ninguna persona puede ser acusada de delito grave sin que medie acusación endosada por un gran jurado compuesto de ciudadanos o vecinos de la comunidad en la cual se comete el delito.

El Gran Jurado Federal se organiza en la ley federal bajo estricta supervisión del Tribunal Federal. El voto del gran jurado no determina la culpabilidad o inocencia de un acusado. Solamente determina si hay causa probable de la comisión de delito grave y qué persona o personas probablemente cometieron el mismo. Si se determina causa probable para acusar y si la Fiscalía Federal endosa la acusación por escrito, el acusado se lleva a juicio público ante otro jurado de doce vecinos de la comunidad, el cual aquilata la prueba y las defensas y determina si los cargos

fueron probados más allá de duda razonable. La composición del gran jurado es de al menos dieciseis y no más de veintitres miembros, de los cuales doce tienen que votar afirmativamente para que se pueda radicar una acusación.

La ley federal protege el gran jurado otorgándole la facultad de llevar a cabo su trabajo en secreto. La secretividad no tiene propósitos siniestros o maléficos. Se trata de secretividad que protege intereses muy importantes. La secretividad promueve la independencia de criterio de los miembros del gran jurado y alienta la franqueza de los testigos que comparecen ante el mismo. Se minimiza el riesgo de intervenciones indebidas y de obstrucción a la justicia por parte de personas inescrupulosas contra testigos y los miembros del gran jurado. Pero, más importante aún, la secretividad protege e insula a aquellos ciudadanos que, aunque investigados como sospechosos, no son acusados por falta de prueba o por no existir causa como tal. La secretividad solo obliga por ley a los miembros del gran jurado, los intérpretes, taquígrafos, fiscales y a personas que por virtud de ley u orden judicial reciben o tienen acceso a la información. Aquí debemos aclarar que al testigo que comparece ante el gran jurado no le obliga la secretividad. Por ende, si este testigo decide dar al traste con los intereses protegidos por la secretividad y pregonar a los cuatro vientos lo que le preguntaron o lo que dijo, puede hacerlo, aunque así abone negativamente al interés cívico y jurídico a proteger. El testigo puede también comentar a terceros sobre lo que le preguntaron o lo que dijo en forma clandestina. De ser así, su identidad al revelar detalles sobre la investigación queda protegida por los que reciben la información. De ahí surge, en la mayoría de

los casos, las famosas filtraciones que se conocen o se publican. Esta filtración de información se puede hacer de mil formas y a veces no tiene nombre y apellido, a no ser el de “fuentes de entero crédito y cercanas a la investigación.”

Sí les aseguro que los jueces federales estamos muy pendientes de este tipo de situación y si un miembro del gran jurado, intérprete, taquígrafo, fiscal federal, abogado, agente del orden público o persona con acceso legal a la información viola la obligación de secretividad o los cánones de ética profesional, ha de responder legalmente por su indiscreción. Tratamos de proteger la letra de la ley y el propósito legal honesto y responsable en la operación del gran jurado.

Una persona citada a testificar ante el gran jurado debe comparecer solo. Si elige tener representación legal, su abogado no puede entrar al salón del gran jurado. De ser necesario consultar con el abogado, al testigo se le permite salir de la sesión y entrevistarse en privado con su asesor legal. Además, un testigo citado ante el gran jurado puede levantar el privilegio contra la autoincriminación bajo la Quinta Enmienda de la Constitución Federal. Si lo hace, el tribunal decide si el privilegio fue invocado correctamente. De ser así, la pregunta o preguntas objetadas no tienen que ser contestadas, a menos que la fiscalía le otorgue inmunidad al testigo.

Una vez el gran jurado recibe la prueba de la fiscalía, el jurado delibera privadamente. La presencia de fiscales, taquígrafos o intérpretes durante la deliberación invalida la actuación del gran jurado. Durante la deliberación, todos los miembros del gran jurado discuten la prueba y si doce de ellos concurren en la

determinación de que hay causa probable de la comisión de un delito y quien lo cometió, un magistrado o juez federal recibe de manos del gran jurado la acusación para fines de radicación.

Por último, recuerden que todos estos asuntos tan interesantes pueden ser objeto de estudio privado por parte de ustedes. Cuando tengan tiempo, visiten nuestro portal general en el Internet, www.uscourts.gov y específicamente el nuestro aquí en Puerto Rico, www.prd.uscourts.gov. Allí encontrarán muchísima información interesante cuyo conocimiento y dominio nos hace mejores ciudadanos. Muchas gracias.